



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, marzo 28 de 2023

Radicado: 05001-31-05-014-2018-00510-01
Demandante: LUIS EDUARDO OLARTE ZAPATA
Demandados: COLPENSIONES
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: RELIQUIDACIÓN IBL LEY 33 DE 1985

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

El proceso se contrajo en determinar, si al señor LUIS EDUARDO OLARTE ZAPATA, le asistía derecho a que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN - ESP reajustara los aportes realizados al sistema general de pensiones, de conformidad con todos los factores devengados; además, debía establecerse si el demandante le asistía derecho a la reliquidación de su mesada pensional teniendo en cuenta el promedio de lo cotizado en el último año de servicios; la indexación de las condenas y las costas procesales.

Subsidiariamente, se estudiaría si al demandante le asiste el derecho a la reliquidación de la prestación económica de vejez, estableciendo el IBL de conformidad con el promedio de lo devengado en los 10 últimos años de servicio, incluyendo todos los conceptos que devengó durante todo ese tiempo, fuesen factores salariales o no.

En sentencia de primera instancia, el A quo tras manifestar que el IBL para aquellos pensionados bajo el beneficio del régimen de transición y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, debía ser obtenido conforme a lo reglado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y en todo caso, los factores salariales que se debían tener en cuenta para el cálculo del IBL eran únicamente aquellos sobre los que se hubieran efectuado cotizaciones al sistema general de pensiones, ABSOLVIÓ a las demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra y condenó en costas al actor.

Inconforme con la decisión fue recurrida por el demandante al manifestar que la juez debió dar aplicación a la interpretación que le ha dado el Consejo de Estado a la aplicación del régimen de transición, que no solo debía atender a edad y tiempo de servicios, sino a la forma de obtener el ingreso base de liquidación. Además, respecto a los factores salariales para liquidar la prestación del actor, debían incluirse todos aquellos que remuneraran sus servicios.

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 la Ley 2213 de 2022 la apoderada de Colpensiones arrió escrito donde solicita que se confirme la decisión proferida en primera instancia.

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, en el presente evento se encuentra por fuera de discusión que: **1)** LUIS EDUARDO OLARTE ZAPATA es pensionado por vejez según consta en el acto administrativo 28239 del 31 de octubre de 2007 le fue reconocida la prestación a cargo del extinto ISS, misma que empezó a disfrutar a partir del 1 de noviembre de 2010 según resolución 19638 del 21 de octubre de 2010 (páginas 9/17 del archivo 4), **2)** Que su prestación fue liquidada bajo el beneficio del régimen de

transición y dando aplicación a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 por lo que tenía acreditados 55 años de edad, y cotizaciones equivalentes a 1626 semanas, **3)** Que la mesada fue reliquidada teniendo en cuenta un IBL de \$1.470.007 para el año 2011 y se le aplicó una tasa de remplazo equivalente al 75%; **4)** Que el 24 de mayo de 2016 elevó reclamación administrativa ante la demandada solicitando la reliquidación de su prestación (página 22 del archivo **5)** solicitud que fue resuelta mediante resolución GNR 190775 del 28 de junio de 2016 donde niegan lo pretendido (páginas 24/31 del archivo **4**).

Atendiendo a los aspectos objeto de apelación, se tiene que el eje central de la controversia en esta instancia gira en torno de establecer si le asiste al accionante el derecho a la reliquidación de su mesada pensional con el IBL previsto en el art 1° de la Ley 33 de 1985 teniendo en cuenta además todos los factores devengados durante la prestación del servicio.

Pues bien, respecto a la posibilidad de liquidar la prestación con el promedio de los salarios del último año de servicios, no se puede desconocer que por efectos del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su beneficio se concede respetando sólo tres aspectos del régimen anterior a la vigencia del sistema general de pensiones, que son la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto pensional, entendido este último como la tasa de reemplazo. Las demás características del derecho pensional son las reguladas por el régimen general.

Y es que la composición del IBL (promedio de los salarios devengados en el último año de servicio) conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 constituye un asunto que escapa a los derechos que por efectos del régimen de transición se integran a la prestación, en tanto el concepto de “monto” solo hace referencia a la tasa de reemplazo, criterio reiterado por la Sala de Casación Laboral de la CSJ SL 4328 de 2022, que a la vez se remite SL 3276 de 2018 e indica:

“Cabe destacar que desde los albores del nuevo sistema general de pensiones, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido sosteniendo de forma pacífica, reiterada y unívoca que la transición no

supuso la prórroga indefinida de los regímenes pensionales anteriores en todos sus componentes, sino respeto de las tres condiciones ya mencionadas, por lo que los demás aspectos, tales como la base reguladora o ingreso base de liquidación, se rigen, íntegramente, por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 44238; CSJ SL, 17 abr. 2012, rad. 53037; CSJ SL 570-2013; CSJ SL4649-2014; CSJ SL2982-2015, CSJ SL17021-2016, SL2510-2017 y SL057-2018, entre muchas otras más).

Particularmente, tratándose del ingreso base de liquidación, se tiene que, para aquellos que a la entrada en operación del sistema pensional estaban a menos de 10 años para causar la prestación, su IBL se compondrá con el tiempo corrido entre la vigencia del régimen hasta el cumplimiento de los requisitos mínimos, o con el ponderado de toda la vida, eligiendo entre ellos el que resulte más favorable y para todos los demás afiliados, la fórmula de liquidación se integrará con el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones o con el acumulado de toda la vida, esta última opción sólo en el evento que se acumulen más de 1250 semanas de cotización (artículos 21 y 36, inciso 3°), interpretación pacífica de esta corporación y que se sustenta en las decisiones del órgano de cierre (ver sentencias SL 3060 de 2019, SL 1372 de 1029, SL 4975 de 2018, entre otras)

Normativa que no rompe con el principio de inescindibilidad, ni obedece a un capricho del funcionario judicial o administrativo, sino que corresponde a la consagración o diseño del legislador, que permitió para aquellos beneficiarios del régimen de transición, un beneficio extra, para que su caso sea reglado parcialmente por la norma derogada, lo que de suyo crea una situación más favorable al afiliado; así lo ha indicado de forma pacífica la Sala de Casación Laboral de la CSJ, entre otras en sentencias SL 8337 de 2016, reiterada en SL 1551 de 2019.

Con estas precisiones y descendiendo al caso concreto, se tiene que el señor LUIS EDUARDO OLARTE ZAPATA es beneficiario del régimen de transición pues a la entrada en vigencia de la Ley 100 contaba con más de 40 años de servicio, consolidando los requisitos pensionales el 30 de noviembre de 2006 (pues para ese momento arribó a los 55 años de edad y superaba los 20 años de servicio), esto es, por fuera del rango de los 10 años siguientes a la vigencia del régimen pensional, por lo que la fórmula para

calcular el IBL es la reglada por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, tal como fue liquidada por Colpensiones, consideraciones expuestas en primera instancia y que se confirmarán, sin encontrar asidero la posición del demandante en el recurso de alzada, al indicar que no existe armonía en las altas cortes con respecto a la forma de liquidación, pues al contrario lo que se desprende de la sentencia de la Corte Constitucional SU 230 de 2015, y de la decisión de unificación del Consejo de Estado Radicado 00143 del 28 de agosto de 2018, es que la tesis de las altas cortes es la misma que aquí se expone.

Ahora bien, el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994 modificado por el artículo 6 del Decreto 691 de 1994 incorporó los factores que debían conformar la base de cotización de los servidores públicos; por su parte, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 consagró en su inciso tercero la remisión en la Ley 4 de 1992 a efectos de establecer el salario base de cotización para dichos afiliados.

Dando aplicación a la norma antedicha la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2761 DE 2021 interpretó en el siguiente sentido:

“Al respecto, todas aquellas pensiones reconocidas en vigencia de la Ley 100 de 1993, incluso en aplicación del régimen de transición, habrán de liquidarse con los factores salariales de la legislación vigente al momento de la causación del derecho, siendo en el caso concreto lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994.

Así se analizó en providencia CSJ SL164-2018, entre otras, donde resolviendo un caso de idénticos contornos, refirió:

De manera pacífica, reiterada y uniforme, esta Sala ha defendido el criterio según el cual los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de los servidores públicos que causaron sus prestaciones en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, son los consignados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6° del Decreto 691 de ese mismo año. Por ejemplo, en fallo CSJ SL 17192, 26 feb. 2002, reiterado en SL 44206, 29 may. 2012, SL1851-2014 y SL4870-2017, sobre el particular, se expuso:

[...]

Por consiguiente, para los referidos efectos resulta indispensable remitirse a lo que dispone el artículo 18 de la ley de seguridad social en cuanto define que el salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y que el salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será el que se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992. Y no debe perderse de vista lo que precisaron las normas reglamentarias al respecto para trabajadores particulares y para servidores públicos.

Surge entonces de lo expuesto que el juzgador de segundo grado no se equivocó al aplicar en este caso el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1158 de 1994 que señala los factores que determinan el salario mensual de base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos, dado que esta disposición forma parte de dicho régimen y en ella no se hace exclusión de ninguna clase.

De lo anterior se colige que no incurrió el ad quem en infracción directa de los artículos 1º y 3º inciso 3º de la Ley 33 de 1985, y 1º inciso 3º de la Ley de 1985, pues, de acuerdo con lo ya resuelto por esta Sala, para efectos de determinar los factores salariales integrantes del IBL se aplica la norma vigente al momento de la causación del derecho, esto es el D.R. 1158 de 1994. Pues como se dijo en la sentencia 26753 de 2006, "...es de iterar que la Ley 33 de 1985, que es la que gobierna la pensión de jubilación del accionante, se aplica en virtud del fenómeno jurídico de la transición en cuanto a la edad, el tiempo de servicios y el monto del 75%, más no en lo tocante a la base salarial, dado que aquélla está regulada en el inciso tercero del aludido artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin que esto implique que se esté fraccionando o escindiendo la norma.

[...]

En este caso no es materia de discusión que con fundamento en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 al actor se le reconoció la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985 a partir del 25 de mayo de 1996, razón por la cual los factores salariales llamados a integrar su prestación son los consignados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, como lo determinó el Tribunal (negrillas fuera del texto).

Por lo tanto, al haberle sido concedida la pensión de vejez a la demandante a través de las Resoluciones n.º 8258 del 22 de septiembre de 2006 y n.º 012593 del 26 de junio de 2008, pues reunió los requisitos el 1º de febrero de 2007, es claro que los factores salariales necesarios para calcular la pensión, como lo afirmó el Tribunal, son los del artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.

Ahora bien, en el caso en que la discusión fuera abordada respecto de la inclusión de factores salariales para efectos de calcular el IBL, dependiendo de si estos fueron devengados y/o cotizados, lo cierto es que tampoco le asistiría razón a la recurrente, pues tal y como lo ha definido recientemente esta Corporación, la pensión debe liquidarse con los ingresos sobre los cuales el empleador hizo efectivamente los aportes al Sistema General de Pensiones.

Así quedó consignado en la providencia CSJ SL164-2018, reiterada por la sentencia CSJ SL2270-2019, entre otras, donde se explicó:

Ahora, respecto a la distinción entre devengado y cotizado que construye el recurrente a partir del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta Corporación ha sostenido que el vocablo devengado consignado en ese precepto debe interpretarse como cotizado, dado que el sistema de seguridad social y las pensiones que de él derivan, dentro de las cuales se encuentran las del régimen de transición, se soporta en una relación de correspondencia entre lo cotizado y el monto de la pensión; de ahí que para liquidar las pensiones es necesario computar los factores salariales sobre los cuales se hicieron aportes al sistema pensional.

[...]

Por esa razón, debe tenerse en cuenta que una característica esencial del sistema general de pensiones es la obligación de efectuar los aportes que se establecen en la Ley 100 de 1993, conforme lo consagra el literal d) de su artículo 13.

Esa fundamental característica encuentra cabal desarrollo en el artículo 18 de ese estatuto, en cuanto determina que la base para calcular las cotizaciones será el salario mensual, para los trabajadores del sector privado el que resulte de aplicar el Código Sustantivo del Trabajo, y para los servidores públicos, como la aquí demandante, el que se señale de conformidad con la Ley 4 de 1992; señalamiento que actualmente hace, como se dijo, el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.

Lógica consecuencia de ello es que en un sistema esencialmente contributivo como el consagrado en esa ley, la determinación del monto de las pensiones debe estar en función de las cotizaciones efectuadas, de ahí que, en principio, aquellas prestaciones causadas cuando esa cotización es obligatoria, esto es, como regla general, después del 1 de abril de 1994, deben tener como parámetro el ingreso que haya servido de base para efectuar la cotización del afiliado.”

Por lo tanto, respecto a la reliquidación de la pensión, teniendo en cuenta todos los factores devengados por el actor, encuentra esta Corporación que tampoco se equivocó el juzgador de instancia, en la medida que su análisis estuvo ajustado a la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto.

Finalmente, siguiendo los lineamientos del art 365 del CGP, costas en esta instancia a cargo del demandante por haber despachado desfavorablemente el recurso de apelación, de las que se fijan como agencias en derecho de la alzada en la suma de \$200.000 y en favor de la demandada Colpensiones.

De esta forma queda resuelta la materia de apelación.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley resuelve **CONFIRMAR** íntegramente la decisión objeto de apelación.

Costas en primera instancia como indicó el A quo. Costas en esta instancia a cargo del demandante, de las que se tasan las agencias en derecho en la suma de \$200.000 y en favor de Colpensiones.

Lo resuelto se notifica por Edicto.

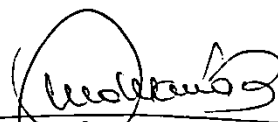
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001-31-05-014-2018-00510-01

Demandante: LUIS EDUARDO OLARTE ZAPATA

Demandados: COLPENSIONES y EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

Decisión: CONFIRMA

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado 10 de abril de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÒPEZ BURGOS

SECRETARIO